

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501320210044001
Proceso:	Ordinario
Demandante:	ADRIANA BOTERO LONDOÑO
Demandado:	COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	28/03/2023
Decisión:	CONFIRMA, MODIFICA Y ADICIONA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 29/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	ADRIANA BOTERO LONDOÑO
DEMANDADAS	COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.
ORIGEN	Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001-31-05-013-2021-00440-01
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ADRIANA BOTERO LONDOÑO contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda<sup>1</sup>

La señora ADRIANA BOTERO LONDOÑO formula demanda contra Colpensiones, Protección S.A., y Porvenir S.A. pretendiendo se declare: **i)** la ineficacia del traslado realizado a Protección S.A., luego a Porvenir S.A., y de regreso a Protección S.A.; subsidiariamente se declare la nulidad de dicho traslado; consecuentemente se ordene **ii)** a Colpensiones aceptar su traslado **iii)** a las demandadas efectuar los trámites necesarios para que se trasladen todos los aportes a Colpensiones desde Protección S.A. y Porvenir S.A. **iv)** Costas y agencias en derecho a cargo de las demandadas.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 9 de noviembre de 1966, afiliándose el 11 de febrero de 1988 al ISS mientras laboraba para el colegio de Estudios Superiores de Administración, efectuó traslado a Protección S.A., en septiembre de 1994, traslado que fue producto de un error inducido por dicha AFP quien no le informó que su pensión de vejez sería reconocida en una cuantía significativamente inferior a la que obtendría en el régimen de prima media con prestación definida, incumpliendo con su obligación de

<sup>1</sup> 01Primera Instancia; 02Demandan, Pág. 5/10

asesorarla adecuadamente, razón por la cual no comprendió las implicaciones de su traslado.

Cuando laboraba para HDI Seguros S.A. se traslado a Porvenir S.A., quien tampoco le brindo una correcta información ni le explicó que le era más beneficioso trasladarse al régimen de prima media con prestación definida, trasladándose nuevamente a Protección S.A., en diciembre de 2008, en septiembre de 2021 solicitó traslado a Colpensiones el cual le fue negado por faltarle menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez.

Indica que entre 2011 y 2021 efectuó cotizaciones entre 14 y 16,22 salarios mínimos para cada año, realizándole Protección S.A., una proyección pensional de la que se obtuvo que la pensión de vejez sería superior en el régimen de prima media, en tanto contaba con 1.457 semanas para agosto de 2021, cumpliendo la edad mínima para pensionarse el 09 de noviembre de 2023.

### **Oposición a las pretensiones de la demanda**

Quienes conforman la pasiva, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, así:

#### **i) Colpensiones<sup>2</sup>**

se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo que el traslado que la demandante realizó al RAIS fue efectuado de forma libre y voluntaria, sin que Colpensiones tuviera incidencia alguna en el mismo, siendo válida la afiliación al RAIS. Propuso como excepciones de merito las que denomino: inexistencia de la obligación respecto al traslado, prescripción, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social, falta de legitimación en la causa para pedir, presunción de legalidad de los actos administrativos, buena fe, compensación, devolución de cuotas y gastos de administración, seguros previsionales y rendimientos y ahorros voluntarios debidamente indexados.

#### **ii) Porvenir S.A.<sup>3</sup>**

se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo que el traslado efectuado en el año 2007 fue producto de una decisión libre, voluntaria e informada de la demandante, sin que se pueda declarar la ineficacia del traslado por no demostrarse la ausencia de los requisitos de validez del acto jurídico, pese a sostener que la ineficacia no existe ni jurídica ni fácticamente expresa que no es procedente la devolución de los gastos de administración. Excepcionó: prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y compensación.

#### **iii) Protección S.A.<sup>4</sup>**

se opuso a las pretensiones en las que se le involucra, principalmente en la relativa a la nulidad y/o ineficacia del traslado aduciendo que el acto de traslado fue existente, valido exento de vicios del consentimiento y de cualquier tipo de fuerza, siendo prueba de ello

---

<sup>2</sup> 01PrimeraInstancia; 13ContestacionColpensiones

<sup>3</sup> 01PrimeraInstancia; 15ContestacionPorvenir

<sup>4</sup> 01PrimeraInstancia; 16ContestacionProteccion

el formulario de afiliación. Excepcionó: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por lata de causa e inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro provisional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por lata de causa porque afecta derechos de terceros de buena fe.

### **Sentencia de primera instancia<sup>5</sup>**

El 30 de septiembre de 2022, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia declarando la ineficacia de la afiliación de la demandante al Régimen de ahorro Individual con Solidaridad administrado por Protección S.A. y Porvenir S.A., condenando a Protección a trasladar a Colpensiones dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante incluyendo las cotizaciones, cuotas y gastos de administración vigentes a partir del 01 de septiembre de 1994 hasta el 30 de septiembre de 2007 y nuevamente a partir del 01 de diciembre de 2008, con los rendimientos que se hubieran causado incluyendo los aportes para garantía de pensión mínima y los valores utilizados en seguros previsionales debidamente indexados, al tiempo que condenó a Porvenir S.A. a trasladar a Colpensiones a devolver dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia las cuotas y/o gastos de administración cobrados por la afiliación de la demandante a dicha entidad entre el 01 de diciembre de 2007 y el 30 de noviembre de 2008 debidamente indexados, ordenando a Colpensiones recibir dichos dineros, reactivando la afiliación de la actora al régimen de prima media con prestación definida, condenando encostas a Protección S.A y Porvenir S.A.

Para fundamentar lo decidido, la juez de primera instancia acudió al precedente judicial vigente en la materia y señaló que las demandadas no demostraron el cumplimiento al deber de información, razón por la cual era procedente acceder a las pretensiones de la demandante, sin que los actos de relacionamiento o la reasesoría tenga la virtualidad de validar el traslado ineficaz.

### **Recurso de apelación:**

**i) Porvenir S.A.** <sup>6</sup> Inconforme con lo decidido en sentencia formuló recurso de apelación parcial contra la sentencia de primera instancia, en lo relativo a la devolución de los gastos de administración, seguros provisionales y demás dineros ordenados reintegrar de forma indexada, considerando que no hay lugar a la devolución de dichos dineros por cuanto no se generan en el régimen de prima media con prestación definida además de no haber sido solicitados en la demandada, estimando que al ordenarse devolver dichas sumas indexadas y los rendimientos constituye una doble condena para la demandada afectando derechos de terceros de buena fe, generando un detrimento injustificado para la entidad con la orden de devolver los recursos a cargo de su patrimonio.

---

<sup>5</sup> 01PrimeraInstancia; 26LinkVisualizacionAudiencia

<sup>6</sup> 01PrimeraInstancia; 26LinkVisualizacionAudiencia

### Alegatos de conclusión en segunda instancia

Corrido el traslado para alegar, fue oportunamente descorrido por Porvenir S.A., Colpensiones y la parte demandante, así:

**i) Porvenir S.A.**<sup>7</sup> manifiesta que en el curso del proceso no fueron alegados o probados los elementos que den lugar a la declaratoria de nulidad absoluta o relativa, razón por la cual dicho acto goza de plena validez, sin que el consentimiento de la demandante estuviera viciado por error, fuerza o dolo, pues no suscribió su traslado en ausencia de capacidad, habiéndole garantizado el derecho al retracto y a la libre escogencia de régimen, razón por la cual solicita se revoque la sentencia de primera instancia y se le absuelva de todas las pretensiones.

**ii) Colpensiones**<sup>8</sup>. Reitera lo expuesto en sus alegatos de conclusión en primera instancia resaltando que no tuvo injerencia en el acto de traslado, alegando inoponibilidad por haber sido un tercero de buena fe, solicitando subsidiariamente que se tenga en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia constituye una carga desproporcionada en cabeza de Colpensiones, conformándose la decisión en torno a la orden a los fondos privados de devolver y reintegrar los recursos de la cuenta de ahorro individual de la actora y de manera indexada los conceptos de gastos de administración, seguros previsionales y cuentas para el fondo de garantía mínima.

**iii) Parte demandante**<sup>9</sup>. Solicita se confirme íntegramente la decisión de primera instancia, en tanto los fondos privados no cumplieron con la carga de la prueba que les permitiera desvirtuar las negaciones indefinidas contenidas en la demanda, debiéndose confirmar por tanto las ordenes relativas a la declaratoria de ineficacia del traslado.

## II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, y los argumentos de la decisión de primera instancia, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS; de ser procedente dicha declaratoria, se precisarán, **b)** las consecuencias de dicha declaración, como el que su afiliación al RPM se considere sin solución de continuidad, así como lo concerniente a los conceptos que deben trasladarse desde las AFP del RAIS hacia Colpensiones.

Lo anterior, dado que el fundamento fáctico de las pretensiones de la demanda es el incumplimiento del deber legal de información por parte de las administradoras, lo que al

---

<sup>7</sup> 02SegundaInstancia; 03AlegatosPorvenir

<sup>8</sup> 02SegundaInstancia; 04AlegatosColpensiones

<sup>9</sup> 02SegundaInstancia; 05AlegatosDemandante

tenor del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, ocasionaría no la nulidad, si no la ineficacia del acto jurídico.

### Hechos relevantes acreditados documentalmente

ADRIANA BOTERO LONDOÑO nació el 09 de noviembre de 1966<sup>10</sup>. Inicialmente se afilió al extinto ISS el 11 de febrero de 1988<sup>11</sup>. El 25 de agosto de 1994 suscribió traslado con destino a Protección S. A.<sup>12</sup>. Posteriormente, el 31 de agosto de 1995 efectuó traslado hacia Colmena hoy Protección S.A.<sup>13</sup>; luego a Porvenir S.A. el 10 de octubre de 2007<sup>14</sup>, retornando a Protección S.A., el 29 de octubre de 2008<sup>15</sup>; para el 18 de agosto de 2021 contaba con 1.457 semanas cotizadas en toda su vida laboral, de las cuales 304,57 lo fueron ante Colpensiones<sup>16</sup>. solicitó a Colpensiones<sup>17</sup>, su retorno al Régimen de Prima Media, el cual fue despachada desfavorablemente<sup>18</sup>.

### a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS.

Con la finalidad de determinar la eficacia o ineficacia de la afiliación al RAIS por parte de la demandante, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

i) Los artículos 48, 53, 335<sup>19</sup> y demás normas concordantes de la Constitución Política; ii) La Ley 100 de 1993 en sus artículos 1<sup>20</sup>, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3º del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) Artículo 4 y demás normas concordantes del Decreto 656 de 1994<sup>21</sup>; iv) Decreto 692 de 1994; v) El Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, contiene prohibiciones expresas<sup>22</sup> para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) los arts. 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994<sup>23</sup>.

<sup>10</sup> 01Primera Instancia; 02Demandan, Pág. 73

<sup>11</sup> 01Primera Instancia; 14ExpedienteAdministrativoColp, Pág. 1

<sup>12</sup> 01Primera Instancia; 16ContestacionProteccion, Pág. 57, no obra el formulario de afiliación, pero se evidencia en el certificado de Asofondos

<sup>13</sup> 01Primera Instancia; 16ContestacionProteccion, Pág. 51/52

<sup>14</sup> 01Primera Instancia; 15ConstestacionPorvenir, pág. 105

<sup>15</sup> 01Primera Instancia; 16ContestacionProteccion, Pág. 57, no obra el formulario de afiliación, pero se evidencia en el certificado de Asofondos

<sup>16</sup> 01Primera Instancia; 02Demandan, Pág. 75/91

<sup>17</sup> 01Primera Instancia; 02Demandan, Pág. 97

<sup>18</sup> 01Primera Instancia; 02Demandan, Pág. 98/99

<sup>19</sup> Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, debido a la función que desempeñan.

<sup>20</sup> Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad "para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan."*

<sup>21</sup> Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

<sup>22</sup> **Se les prohíbe: "No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas".**

<sup>23</sup> Norma reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP. disponiendo en el inciso final del artículo 4: QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP , respecto de la cual se hubiere promovido la

Adicionalmente es pertinente hacer un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que estructura el tema, y está contenida en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021, basada en la necesidad de determinar si en cada asunto concreto, la AFP receptora de la afiliación satisfizo tanto para ese momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, la obligación consagrada en el numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, de “*suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen*”. No pudiéndose predicar como sostiene la pasiva, ni la Superintendencia Financiera que, la existencia del deber de asesoría, solo se originó desde la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

Advierte esa alta Corporación de Justicia sobre la necesidad de que la decisión del traslado de Régimen esté precedida de toda información relevante que el Fondo de pensiones proporcione a quien pretenda afiliarse, la cual, debe ser suficiente, completa y clara sobre las implicaciones que le conllevaría dejar el anterior Régimen y sus posibles consecuencias futuras. Pues, conforme al Estatuto Financiero de la época en los Artículos 97 y siguientes, consagró que las administradas debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, los siguientes:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. y,
- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, por ser determinante en ello, la falta de información al afiliado.

Múltiples Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín han considerado que, si bien los casos concretos abordados por la H. Corte Suprema de Justicia, refieren

---

respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.

a personas que fueron beneficiarias del régimen de transición pensional consagrado en el art. 36 de la Ley 100/93, su *ratio decidendi* aplica para quienes se afilian al Sistema Pensional por primera vez o se trasladan entre regímenes en el marco del mismo, enfatizando en la necesidad de demostrar en cada proceso si la AFP suministró, a quien una vez fuera su potencial afiliado, *información clara, completa, suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, a fin de poder concluirse que la decisión adoptada entonces, obedeció a un conocimiento diáfano y preciso, no sólo de lo que se hacía, sino de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por tanto, ese acto jurídico surgió de una real manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Lo anterior, tal y como reitera la CSJ en sentencias SL 1688-2019 y 373 de 2020, que radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no beneficio transicional o si se está próximo a adquirir requisitos para pensionarse, “*dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado.*”

Por estas razones, lo argumentado por la pasiva en torno a que la suscripción del formulario acredita la libre, voluntaria e informada manifestación de voluntad de la afiliada al momento del traslado o que debe desatenderse la línea jurisprudencial en materia de carga probatoria en asuntos como el que nos ocupa, no constituyen razones atendibles para exonerar del cumplimiento de sus obligaciones a la Administradora, menos aún, por cuanto, en los asuntos como el presente, no se discute la capacidad jurídica de los celebrantes, ni la licitud de los traslados; se atiende es al hecho de haberse dado el traslado de régimen pensional sin que el mismo estuviese precedido de la satisfacción del cumplimiento del deber de información por parte de la administradora que captó al afiliado.

No son admisibles los argumentos expresados por Protección S.A., en cuanto a que el traslado obedeció a una decisión espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley; se satisfizo el deber de información en los términos exigidos para entonces; situación que tampoco acreditó, limitándose a afirmar que así había ocurrido. El que asevere que han hecho campañas masivas para educar al consumidor financiero y comunicados de prensa informando los cambios normativos o que el deber de información no fue obligatorio si no desde la expedición de la Circular 016 de 2016 o que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación son obligaciones que surgieron en 2010 y 2014, puesto que a la actividad misma de la administradora demandada subyace la obligación desde la creación misma del régimen pensional, de ilustrar suficientemente al potencial afiliado sobre las condiciones de ambos regímenes, su funcionamiento y expectativas, de manera que cada persona adopte una decisión informada y consciente sobre su futuro pensional.

No pudiéndose aplicar tampoco, a la aquí demandante la regulación de 2010 sobre deber del consumidor financiero, por cuanto su traslado se firmó en 1994 cuando no existía esa disposición, pero sí estaba vigente y se ha consolidado la que ha obligado a las AFP a brindar la información no bastando con la suscripción del formulario de afiliación, por cuanto su uso, no exime, ni avala la omisión de los deberes impuestos por



las leyes a las AFP, y por tanto, se reitera, que previo a la suscripción de ese formulario, éstas entidades deben en un acto responsable y comprometido con su función social, dar a conocer a los potenciales afiliados, todas las implicaciones del traslado, como sostuvo la Corte en **sentencia SL 4360 de 2019** Radicado 68852.

Sobre la carga dinámica de la prueba, ha de indicarse que ésta radica en cabeza de las AFP que a través de sus agentes propiciaron el traslado de régimen del asegurado, tal y como se aprecia en la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es la AFP a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, al hallarse en mejor posición de ilustrarlo, por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado, además, de estar facultado el fallador por el **artículo 167 del Código General del Proceso**, para distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos de convicción tendientes a esclarecer el objeto del litigio y en asuntos como el que hoy nos ocupa, sin duda quien debe cumplir dicha carga es la AFP del RAIS, por cuanto: i) Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, así como la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, **y la que se le haya entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; ii) Conoce y posee los datos de ubicación y preparación que recibió **el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y posibilitó que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

En el sublite, mediante la prueba documental arribada, se evidencia que ADRIANA BOTERO LONDOÑO nació el 09 de noviembre de 1966<sup>24</sup>, por lo que, al 01 de abril 1994, cuando inició vigencia el SGSSP para ella, tenía 27 años, y no tenía 15 o más años de servicios y/o cotizaciones, por lo que nunca fue beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El 25 de agosto de 1994 suscribió traslado con destino a Protección S.A.<sup>25</sup>, el cual se acusa de ineficaz. Posteriormente, el 31 de agosto de 1995 efectuó traslado hacia Colmena hoy Protección S.A.<sup>26</sup>; luego a Porvenir S.A. el 10 de octubre de 2007<sup>27</sup>, retornando a Protección S.A., el 29 de octubre de 2008<sup>28</sup>.

Igualmente fue recaudado interrogatorio a la demandante, sin que se produjera confesión de su parte, pues en torno a las condiciones presentadas durante su traslado hacia el RAIS, manifestó que mientras trabajaba para una compañía de seguros fue visitada por una asesora de Protección quien le recomendó hacer el cambio al fondo privado porque el seguro social se iba a acabar y la rentabilidad que iba a tener con Protección iba a ser mejor, siendo también la pensión mejor, indicándole que el bono pensional pasaría a Protección, pero que nunca le indicaron la posibilidad de que sus beneficiarios heredaran en caso de su fallecimiento los dineros que había aportado, ni le dijeron que podría hacer

---

<sup>24</sup> 01Primera Instancia; 02Demandan, Pág. 73

<sup>25</sup> 01Primera Instancia; 16ContestacionProteccion, Pág. 57, no obra el formulario de afiliación, pero se evidencia en el certificado de Asofondos

<sup>26</sup> 01Primera Instancia; 16ContestacionProteccion, Pág. 51/52

<sup>27</sup> 01Primera Instancia; 15ConstestacionPorvenir, pág. 105

<sup>28</sup> 01Primera Instancia; 16ContestacionProteccion, Pág. 57, no obra el formulario de afiliación, pero se evidencia en el certificado de Asofondos

aportes voluntarios a pensión obligatoria, solamente le señalaron que podría hacer aportes voluntarios, y que incluso, ya hizo una pensión voluntaria. Manifiesta que si hizo preguntas en la asesoría inicial respecto a por qué se iba a acabar el ISS y si iba a tener una mayor rentabilidad al pasarse a un fondo privado de pensiones y que las respuestas a esas dos preguntas fueron afirmativas y que por ello tomó la decisión del cambio. Indica que en ningún momento se sintió obligada para hacer el traslado de régimen, recibiendo extractos de su cuenta de ahorro individual de forma periódica por parte de Protección.

En este caso, la AFP Protección S.A., como encargada de tramitar el traslado de régimen pensional, estaba llamada a demostrar que ese traslado no se vio afectado en su eficacia por haberle suministrado la información suficiente, clara, completa a la entonces potencial afiliada, sin embargo no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar a la hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar en la posible afiliada, verdadero consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha aclarado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Adicionalmente, deviene innecesario analizar las condiciones de afiliación a Porvenir S.A., pues la ineficacia del traslado de régimen afecta todo traslado entre administradoras que se haya presentado con posterioridad, sin que el hecho de habersele brindado reasesoría convalide el traslado que nació ineficaz.

De ello no hay elementos de convicción en el plenario distintos del formulario de afiliación en ésta, sobre el cual la AFP Protección S.A. adujo que, estando suscrito por la demandante, quien lo hizo de manera libre y voluntaria, no es dable restarle valor y menos desconocer este acto; sin embargo, en este sentido, las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. conforme al **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado recae en quien debió emplearlo y, ello no se satisface solo con allegar documentos previamente elaborados en los que se limita a llenar espacios en blanco, que suscriben las partes, sino con la evidencia real de que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte

una decisión completamente libre, y que la asesoría brindada fue suficiente para la persona. Lo cual, es acorde con lo normado en **los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994**, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, según los cuales, no se trata sólo de completar un formato, ni adherir a una cláusula genérica, sino de haber transmitido elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, sea que estuviere o no la persona en transición.

Los considerandos de esta providencia también sustentan que los actos del demandante posteriores al traslado, como su prolongado silencio, o el sufragar aportes, fueren indicadores de su intención de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual, debiendo recordarse el reiterado precedente de la Sala de Casación Laboral, según el cual, el debate probatorio en los asuntos de ineficacia de traslado se encamina a establecer si, con anterioridad y al momento del acto de traslado, se cumplió el tantas veces nombrado deber de información, **sin considerar los actos posteriores que el afiliado pudiese realizar, pues** la jurisprudencia del órgano de cierre en materia de seguridad social ha dilucidado de manera uniforme que, si la debida asesoría no se brinda con anterioridad y/o al momento de la materialización del traslado, al no cumplir su propósito de generar consentimiento informado para el acto de traslado, se equipara a la ausencia de información (**SL1688-2019, SL2877-2020, SL2937-2021, SL3349-2021**), y adicionalmente, esa falta de información en esta materia, no se convalida por los traslados de administradoras dentro del Régimen de Ahorro Individual (SL3199- 2021).

De ahí que, no procede adoptar el criterio aislado contenido en la providencia **SL2440-2021**<sup>29</sup>, donde una de las Salas de Descongestión de la CSJ., expuso la tesis de los llamados “actos de relacionamiento,” que valga anotar, había formulado la Sala de Casación Laboral permanente en la SL413-2018, en un proceso donde se debatía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y fue necesario analizar la voluntad de permanencia del afiliado en un específico régimen pensional, por cuanto no resultaba diáfano a cuál de los regímenes pertenecía, litigio notoriamente ajeno a los asuntos de ineficacia de traslado de régimen pensional.

Conforme al precedente en cita, acogido por esta Sala, el incumplimiento de las mencionadas obligaciones de información por parte de Protección S.A., vulneradora de la libre y voluntaria selección de régimen prevista en el literal b del Artículo 13 de la ley 100 de 1993<sup>30</sup> genera consecuentemente la INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS, como repuesta jurídica a la transgresión de ese deber legal y ello implica que, el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún efecto, lo cual fue precisado en **sentencia SL4360 de 2019**, concluyendo en que: “la sanción impuesta en el artículo 271<sup>31</sup> de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en

<sup>29</sup> por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral

<sup>30</sup> **13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.

<sup>31</sup> El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud<sup><1></sup> en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de

sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado”, lo cual, da lugar a garantizar el derecho del accionante a retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES y a declarar que ha permanecido afiliada, sin solución de continuidad, lo que conlleva a la reactivación de su respectiva afiliación en este último régimen.

Tales motivaciones permiten **confirmar** en ese aspecto la sentencia conocida en apelación y consulta.

## **b) Consecuencias económicas de la declaratoria de ineficacia**

Atendiendo al principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, con el fin de que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios, y fundamentalmente se garantice la no afectación financiera del régimen de prima media, y pueda satisfacer las prestaciones que se generen a su cargo, producto de la declaratoria de ineficacia, todos los recursos recibidos con motivo de la afiliación al régimen de Ahorro Individual, deben trasladarse a la administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto, tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, dado que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional se cubren las prestaciones causadas. Además de ser menester que, por efecto de la declaratoria de la ineficacia en asuntos como el abordado en este proceso, la parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información garantice que el patrimonio de la persona inducida a la afiliación no sufra deterioro, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él, como ha dilucidado el precedente jurisprudencial de la H CSJ en SCL., que esta Sala acoge.

Se rememora que, para efecto de la devolución de conceptos hacia el RPM, con anterioridad, esta Sala de Decisión disponía que, el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente de la Corte Constitucional plasmado en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 de 2010** y **SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM, **y de otro lado**, y se abstenía de ordenar que las AFP del RAIS remitieran con destino a Colpensiones, los valores correspondientes a las sumas adicionales de las aseguradoras, retomando el punto, y por las razones anteriormente expuestas en este acápite, considerando el precedente de la Sala de Casación Laboral<sup>32</sup> contenido en sentencias **SL 3202-2021**, **SL 2769-2021**,

---

solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios.

<sup>32</sup> Esta Sala atiende el precedente judicial original de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 y dando aplicación al artículo 1746 del Código Civil, en los cuales fundamentan la *ratio decidendi* de estos procesos, donde esa Alta Corporación determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, si los hubiere, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también las sumas adicionales de la aseguradora, por tanto, se adopta en estricto sentido lo decidido por nuestro órgano de cierre en la materia, ordenando a Colfondos S.A., que traslade a Colpensiones, los valores descontados a la demandante durante el tiempo de su afiliación en ella, por concepto

**SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021**, esta Sala ha precisado que las cuotas de administración y los descuentos del seguro previsional, que hubieren descontado las referidas AFP's del RAIS durante el periodo de afiliación de la hoy demandante en ella, **se deben trasladar** hacia COLPENSIONES debidamente **indexadas** y con cargo a sus propios recursos con el fin de que se satisfagan en su valor actualizado, dado que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana constituye un hecho notorio.

Bajo las referidas premisas, se **confirmará** las órdenes impartidas desde la primera instancia a **PROTECCIÓN S.A. -AFP a la que actualmente se encuentra afiliada la actora** en el sentido que esta AFP del RAIS, dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia, debe trasladar a COLPENSIONES **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros que se han generado durante todo el tiempo en que la hoy demandante figuró como afiliado al RAIS, así mismo; se **adicionará** en el sentido de que **Porvenir S.A. y Protección S.A., además de las cuotas de administración, también deben trasladar a la referida AFP del RPM, el dinero con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y las sumas adicionales de las aseguradoras**, por ellas descontadas durante el periodo de afiliación de la hoy demandante en cada una de ellas, pues no se discute la legalidad de tales descuentos, ni, si el dinero de la afiliada fue administrado adecuada y eficientemente, sino que, como consecuencia de la ineficacia del traslado inicial al RAIS, y por no haberse estudiado previamente a la afiliación la situación particular de la hoy demandante, y no estando demostrado cuáles fueron los argumentos esgrimidos por las AFP para aseverar que cumplieron con los deberes de información que sostienen haberle dado, no es pertinente exonerarlas de la devolución de tales conceptos, independientemente de que Colpensiones no haya administrado el dinero de la afiliada, ni asumido los riesgos que esa actividad conlleva, no pudiendo discutir inexistencia de motivos para entregarlos, detrimento patrimonial, ni enriquecimiento sin causa para Colpensiones y el demandante, tampoco transgrede derechos de las demandadas, por evidenciarse la omisión de asesoría completa y previa a la migración de la accionante hacia el RAIS y dentro de ese mismo régimen, pues si bien existió una administración por parte de la AFP del RAIS, además del pago de seguros, consecuentemente a la declaratoria de ineficacia, todos los recursos deben trasladarse a Colpensiones, administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de la pensión que se genere en favor de la hoy demandante, como anteriormente se explicó.

**Protección S.A., además** deberá responder por la devolución de lo descontado por cuotas o gastos de administración durante el tiempo de afiliación de la demandante ante Colmena Pensiones y Cesantías, en este aspecto se **adiciona** la decisión de primera instancia, dado que, en virtud de la fusión presentada por esa AFP con Protección S.A., al celebrar el referido negocio jurídico, se subroga tanto en derecho, como en obligaciones respecto de sus afiliados, y debe protegerse el equilibrio financiero del RPM.

Por lo expuesto, no se acogerá el **Concepto del 17 de enero de 2020 emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia**, a la luz del artículo 28 del CPACA<sup>33</sup>, ante consulta realizada por la Vicepresidente Jurídica de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías -ASOFONDOS-, interpretando que para determinar los recursos a trasladar con motivo de la declaratoria judicial de nulidad o ineficacia de traslado de régimen debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 3995 de 2008<sup>34</sup>, toda vez que dicha norma fue expedida para efectos de traslado en asuntos referentes a multiafiliación, situación que no corresponde a la aquí ventilada y adicionalmente, tal concepto no obliga, pues se encuentra decantado por el órgano de cierre judicial en materia laboral y de seguridad social que los gastos administración y prima de seguro previsional deben retornar a Colpensiones como consecuencia de la ineficacia declarada.

En consecuencia, las órdenes impartidas desde la primera instancia, se **MODIFICARÁN** como se dijo, y se reitera, deberán cumplirse dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia.

Al momento de cumplirse esta sentencia, los conceptos deberán aparecer detallados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con ambas AFP's del RAIS sin trasladar consecuencias negativas al actor.

Se ordenará a COLPENSIONES recibir de PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, y se homologarán en el régimen de prima media las semanas cotizadas por el actor durante su afiliación en el RAIS.

En este sentido se **confirmará, modificará y adicionará** la sentencia conocida en apelación y consulta.

### III. EXCEPCIONES

En grado jurisdiccional de consulta se estudian, además, las excepciones formuladas por la pasiva, las cuales quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

En especial, no operó la prescripción pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el que recae y el reconocimiento

---

<sup>33</sup> **"ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS.** <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución."

<sup>34</sup> **Decreto 3395 de 2008 ARTÍCULO 1o. ÁMBITO DE APLICACIÓN.** <Artículo compilado en el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que al 31 de diciembre de 2007, se encuentren incurso en situación de múltiple vinculación entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad y señala algunas normas de traslados de afiliados, recursos e información.

A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, se trasladaron al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) faltándoles 10 años o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la pensión en este régimen, se les aplicará lo que establecen los artículos 7o, 8o y 12 del presente decreto

pensional se presentó como una de las consecuencias del retorno al RPM administrado por Colpensiones, además esta Sala, acoge la postura pacífica de la H. Corte Suprema de Justicia, respecto a que las acciones judiciales tendientes a comprobar la forma en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles, como es el caso de la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

#### IV. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A. por haber resultado vencida en su recurso. Se fijan agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2022, y en favor del demandante. Lo anterior a tenor de lo dispuesto en el artículo 365 del CGP.

#### V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el 30 de septiembre de 2022, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por la señora **ADRIANA BOTERO LONDOÑO** contra COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., **modificándola y adicionándola** en el sentido en que esta última:

Trasladará a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, con destino a fondo del RPM la totalidad de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante la totalidad del tiempo en que la referida demandante ha figurado como afiliado en el RAIS.

Además, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. trasladarán a Colpensiones además de los valores descontados a la actora por concepto de comisiones y gastos de administración, también los valores descontados por aportes para la garantía de pensión mínima y los correspondientes a los seguros provisionales con cargo a sus propios recursos, los cuales trasladarán debidamente indexados ello por todo el tiempo en que dicha demandante figuró como afiliada en cada una de ellas; adicionalmente PROTECCIÓN S.A. devolverá por los referidos valores por el tiempo de afiliación de la demandante ante COLMENA Pensiones y Cesantías.

El cumplimiento de lo ordenado será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de las demandadas del RAIS los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, e incorporar los respectivos aportes pensionales completos en la historia laboral del demandante como si hubiera permanecido en el RPM.

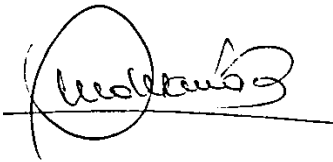
**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. Agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2022.

Se ordena notificar lo resuelto por edicto.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN